HÉCTOR GONZÁLEZ URIBE

Estado y democracia en la perspectiva mexicana actual*

TRATÁNDOSE del tema del estado y la democracia en México, resulta indudable que son múltiples los enfoques desde los cuales podemos considerarlo. Para tener un conocimiento más completo y preciso necesitamos recurrir a diversas disciplinas que nos van ofreciendo, cada una en su turno, sus resultados, lo que nos permite integrar un cuadro bastante adecuado. Esas disciplinas tienen su rigor científico peculiar y sus propias metodologías. Y a través de sus análisis nos es factible obtener algunos resultados críticos inmediatos. Así, por ejemplo, la ciencia política positiva, con la ayuda de los métodos sociológicos de observación, experimentación y comparación nos ofrece la posibilidad de análisis objetivos y precisos de la realidad política que nos permiten enjuiciamientos bastante acertados.

Sin embargo, en el caso presente, vamos a prescindir de las observaciones críticas inmediatas de los problemas políticos de México para fijarnos más bien en algunos principios de filosofía política que nos hagan posible una apreciación serena y madura de esos problemas. Y de los cuales, naturalmente, podrán derivarse después los correspondientes juicios de valor. Tomamos muy en cuenta los resultados de las ciencias sociales. Sólo que por ahora nos vamos a fijar, preferentemente, en los postulados teóricos que les sirven de base.

* Texto de la conferencia dictada en el ITAM el 10 de abril de 1984, durante el ciclo "Presencia del hombre en la reflexión filosófica".

Vida y pasión del estado en el mundo moderno y contemporáneo

Comenzaremos por examinar más de cerca al estado. Ante todo es una realidad imponente y abrumadora en la vida de nuestras sociedades contemporáneas, un monstruoso Leviatán que nos espera por dondequiera que vayamos y que nos exige continuamente sacrificios económicos —impuestos, contribuciones, pago de derechos— y, lo que es más grave, sacrificios personales, de nuestra libertad y de nuestra vida. Pero, por otro lado, es una realidad enigmática e inquietante. Nos brinda paz y seguridad y, en muchas ocasiones, nos imparte la justicia que necesitamos. Y también nos proporciona servicios públicos que los particulares solos no podrían dar: aeropuertos, carreteras, redes telegráfica y telefónica, salubridad y asistencia, impulso a la educación y a la investigación científica, y muchos otros. ¿Qué decir, entonces del estado? ¿Qué actitud tomar frente a él?

Colocados frente a esta extraña realidad —en la que, queriéndolo o no, estamos inmersos vitalmente— se nos ocurre preguntar cinco cosas que nos interesan y preocupan: ¿qué es el estado, cuál es su naturaleza? ¿Cómo es el estado, cómo está organizado y de qué manera funciona? ¿Por qué existe el estado, cuál es su sentido, su función propia en la sociedad? ¿Se justifica la existencia del estado, por qué debe existir, a pesar de las contradicciones que provoca? ¿Para qué existe el estado, qué fines se propone, qué objetivos busca, de inmediato o a largo plazo? Si logramos contestar adecuada y satisfactoriamente a estas preguntas habremos obtenido un buen conocimiento del estado.

Pero debemos, desde luego, aclarar que el estado que conocemos nosotros, hombres del siglo XX, no ha existido en todas las épocas históricas. Desde la antigüedad, y desde tiempos prehistóricos, han existido diversas formas de organización política. Sin embargo, lo que hoy conocemos como estado ha tenido una vida más limitada pues pertenece a los tiempos modernos. Con gran claridad y precisión nos dice el tratadista alemán Hermann Heller que ese estado es el que se da “en el

círculo cultural de Occidente, a partir del Renacimiento". Y tiene toda la razón, porque es apenas a comienzos del siglo XVI cuando se da la figura del estado, con su centralización jurídica y política y su soberanía característica. Es algo muy distinto de las formaciones políticas antiguas y medievales, aunque sin duda se venía gestando lentamente a lo largo de los siglos.

Instalado así en la modernidad, el estado ha ido siguiendo las vicisitudes históricas de la edad moderna. Los primeros siglos fueron los del absolutismo real y el estado tuvo, entonces, una configuración absolutista. El poder absoluto estaba en manos de los reyes y de sus funcionarios subordinados. El pueblo, en cuanto tal, era sólo una masa de súbditos, obedientes y sumisos. Y esos súbditos no tenían ni podían hacer valer derechos frente al soberano. A ellos les tocaba "callar y obedecer", como decían los voceros de los monarcas.

El estado absolutista no era fruto únicamente de las tendencias económicas y políticas de la época, sino de una verdadera ideología absolutista. Había autores muy destacados que se empeñaban en demostrar que el mejor régimen político era el que se basaba en el poder absoluto de los monarcas. Y lo hacían apoyándose en razones diversas. Nicolás Maquiavelo, en plena época renacentista italiana, se basaba en argumentos de conveniencia política. Italia necesitaba un príncipe fuerte que lograra la unificación de los diversos señoríos que dominaban en la península. Y para ello debía tener un poder absoluto, sin escrúpulos morales, ya que el fin supremo del estado era precisamente mantener a toda costa el poder e impedir que se perdiera. En Francia, el riguroso jurista, filósofo y economista hugonote Juan Bodino, deseoso de asegurar la paz, en medio de las crueles y devastadoras guerras de religión, se apoyaba en argumentos jurídicos para sostener la necesidad del poder absoluto. El atributo esencial del estado debía ser la soberanía, es decir, "el poder absoluto y perpetuo de la república", entendiendo aquí por república no una forma de gobierno, sino la "cosa pública", o sea, la comunidad estatal. Y esa soberanía debía expresarse como una "potestad suprema sobre ciudadanos y súbditos, no sometida a las leyes".

En Inglaterra, en la primera mitad del siglo XVII, el filósofo Tomás Hobbes, impresionado por las consecuencias de la

revolución que había llevado al cadalso al rey Carlos I, se basaba en argumentos filosóficos para sostener el poder absoluto de los reyes, como personificación del estado. El estado debía ser el Leviatán, todopoderoso e invencible, dotado del máximo poder eclesiástico y civil, al que los súbditos debían entregar todos sus derechos a fin de encontrar la paz y la seguridad. Del estado de naturaleza en el que predominaba la "guerra de todos contra todos" se debía pasar, así, al estado civil, propio de gentes civilizadas.

En la Francia de Luis XIV, a fines del siglo XVII y principios del XVIII, estos argumentos en pro del absolutismo tomaban un tinte más bien teológico. El obispo Jacobo Benigno Bossuet, preceptor de los hijos del rey, hablaba de un derecho divino de los reyes y de la obligación de los súbditos de obedecer al monarca como representante de Dios en la tierra. Sus enseñanzas sobre política pretendían estar "tomadas de las palabras mismas de la Sagrada Escritura".

De esta manera creció y se consolidó, durante más de dos siglos, el estado absolutista en el mundo occidental. Pero su predominio se debilitó y llegó a perderse cuando los pueblos fueron adquiriendo mayor conciencia de sus derechos. Y aquí también no fueron tanto los cambios económicos y políticos o las guerras y movimientos internacionales los que determinaron el paso del régimen del absolutismo a un régimen democrático, sino más bien la gran influencia que ejercieron pensadores distinguidos con sus obras decisivas. Quien primero atacó duramente al absolutismo estatal fue el inglés John Locke, que en su *Ensayo sobre el gobierno civil* demostró cómo la fuente y origen del gobierno político era la voluntad de los ciudadanos y no los pretendidos derechos monárquicos. Más tarde, en Francia —bastión del absolutismo en el siglo XVIII— el barón de Montesquieu, inspirándose en el pensamiento y en las realidades inglesas, expuso en su obra *El espíritu de las leyes* el esquema de un estado en donde el poder estaba limitado por el poder mismo, desde dentro, por una sabia división de poderes y un sano equilibrio de funciones. En Francia también, en la segunda mitad del siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau, el inconforme, crítico agudo de la sociedad de privilegios y desigualdades de su tiempo, publicó en 1762 *El contrato social*.

Principios de derecho político, y trató de fundamentar el derecho a una sociedad de hombres libres e iguales. Sus ideas habrían de revolucionar el ambiente francés y manifestarse incluso en las obras que prepararon, de inmediato, la revolución de 1789, como la sugerente del abate Emmanuel Siéyès, llamada *¿Qué es el tercer estado?*, en la cual quería mostrar cómo el estamento popular, que hasta entonces no había sido nada y, sin embargo, era todo en el reino de Francia, aspiraba a ser algo. Este pequeño libro de Siéyès preparó el ambiente para la transformación de los estados generales en asamblea constituyente, que abolió los privilegios feudales y aprobó la *Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano*.

Con la revolución francesa y las constituciones políticas que de ella emanaron cambió totalmente la fisonomía del estado: de un estado absolutista, basado en el poder omnímodo de los monarcas y en los derechos prevalecientes de unos cuantos privilegiados, se pasó al estado democrático, fundado en la soberanía popular y en la igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Estas ideas inspiraron, durante todo el siglo XIX y comienzos del XX, las nuevas constituciones políticas de los estados, que abrieron los cauces de una vida democrática y libre para los pueblos.

El régimen constitucional, como expresión de la limitación del poder por el derecho, fue el paradigma al que se ajustaron casi todos los pueblos civilizados de la tierra. Pero juntamente con esta figura jurídica y política fue creciendo el sistema económico del capitalismo industrial, comercial y financiero, y con él una nueva clase dominante, la clase burguesa. Esta clase logró acomodar, en su favor, los mecanismos ideados y puestos en práctica por el estado democrático para contener el poder dentro de los límites de la legalidad y evitar la violación de los derechos individuales. Y transformó, así, la figura del estado democrático en la de un verdadero estado de derecho liberal-burgués. Este estado llegó a su auge en el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta el estallido de la primera guerra mundial en 1914.

En la primera posguerra, entre 1919 y 1939, la figura del estado de derecho liberal-burgués entró en crisis. El conflicto bélico, de alcances mundiales, había conmocionado a los pue-

blos. La fe en la democracia liberal, basada en el parlamentarismo y en el libre juego de los partidos políticos, en la igualdad jurídica de los ciudadanos y en el sistema económico de mercado libre, sin restricciones, vino por tierra. El mito de la ciencia como panacea universal se desplomó y mostró su insuficiencia. Se extendió, por todas partes, el hambre, la inflación, el desempleo, y, sobre todo, la desesperanza. Las grandes masas de trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, pugnaban por hacer valer sus derechos. La igualdad jurídica de la época del liberalismo se hacía obsoleta frente a las terribles desigualdades económicas del mundo real. Y en estas condiciones, como era natural, hicieron su aparición los demagogos, los líderes populares que prometían libertad, seguridad, paz y prosperidad a las clases populares. Fue primero Lenin, en Rusia, con su movimiento bolchevique, agitando la bandera del mesianismo proletario; vino después Mussolini, en Italia, con la promesa de un estado fuerte y una vuelta a la grandeza de la romanidad; y en tercer lugar, Adolfo Hitler, en Alemania, con la perspectiva de una revancha militar contra los que habían vencido al pueblo alemán en la primera guerra mundial y el futuro predominio de la raza aria en el mundo.

Frente a las carencias y defectos del régimen liberal proliferaron en Europa y América y otras partes del mundo una serie de movimientos —unos más exagerados, otros más moderados— que buscaban un nuevo modelo de estado. Se le llamaba a veces estado comunista y otras estado fascista, pero se caracterizaban por sus tendencias autoritarias que en ocasiones culminaron en una nueva y temible figura: la del estado totalitario. En ella se cumplían las indicaciones de Mussolini: todo dentro del estado; nada fuera del estado; nada, absolutamente nada, contra el estado. Y así surgieron los tres grandes estados totalitarios de nuestro siglo: el estado comunista, en la URSS; el estado nacional fascista, en Italia; el estado nacional-socialista en Alemania.

Una nueva figura jurídica y política parecía venir a sustituir al estado democrático: la del estado totalitario. Y tal vez se hubiera impuesto si no hubiera sido por la segunda guerra mundial. En la terrible conflagración perecieron las ambiciones de Hitler y Mussolini y con ellas la pretensión de imponer sus

ideas totalitarias al mundo. Tal parecía que la democracia saldría triunfante y se impondría otra vez, con nuevas modalidades, a todos los países civilizados. Pero por desgracia los errores cometidos por Inglaterra y Estados Unidos permitieron que la Unión Soviética, con su sistema comunista totalitario, saliera victoriosa y, no conforme con ello, se dedicara a exportar ese sistema a otros países.

Se ha creado con ello, en los últimos cuarenta años, una bipolaridad entre los estados democráticos y los nuevos estados totalitarios, encabezados por la URSS. Se le ha llamado de diversos modos: capitalismo-socialismo; mundo libre-mundo comunista; democracia-totalitarismo. Pero el hecho es que sigue vigente la amenaza totalitaria. En la actualidad, el estado sigue siendo la institución social más importante del mundo. El estado democrático ha ido evolucionando hacia un estado social de derecho, sin perder sus características de raigambre popular. En cambio, el estado totalitario —descontando las figuras patológicas de las dictaduras militares— se ha orientado hacia el comunismo, en diversas formas, desde el socialismo democrático que está en la antesala de la dictadura del partido, hasta el socialismo plenamente autoritario, inspirado en el modelo de la URSS.

Democracia: realidad e ideal

Hemos hablado, hasta aquí, del estado democrático. Y, ¿qué es la democracia? ¿Cuáles son sus orígenes y sus características?

Pocos términos en el lenguaje político, así científico como vulgar, resultan tan proteicos y difíciles de precisar como el de democracia. Y no porque no se le tenga perfectamente determinado en la historia política, la ciencia política y el derecho político, sino porque se le emplea en contextos muy distintos y hasta contradictorios o bien con significados diferentes. Se habla, por ejemplo, de democracia parlamentaria en un estado tan respetuoso de las leyes y libertades como Inglaterra; y se habla de democracias populares en países de estructura totalitaria en los que no existe más que un solo partido, el comunista, que impone su voluntad sobre la sociedad estatal. Se llega a

hablar, incluso, de una República Democrática Alemana, contraponiéndola a la República Federal de Alemania, cuando es perfectamente sabido que es un estado satélite de la URSS en el que no hay más que una ideología, la marxista-leninista, y un solo partido dominante, el comunista. Y así en otros casos semejantes.

Por otro lado, el vocablo democracia se emplea lo mismo para denominar la realidad de la forma de gobierno de un pueblo, en el terreno sociológico y en el jurídico, que el ideal filosófico-político al que deben tender las sociedades civilizadas, como expresión del mejor régimen político. En este último sentido, se habla de un significado "eulogístico" de la democracia, o sea, como lo que debe ser, como lo óptimo.

Aquí nos vamos a referir a la democracia en sus dos sentidos, como ser y deber ser, como forma de gobierno y como estilo de vida. La democracia, referida a la vida política de los pueblos, es aquella forma o manera de gobernar a la sociedad en la cual el poder proviene del pueblo y se ejercita a nombre del pueblo y para beneficio de éste. Podemos recordar aquí la célebre definición de Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburgh: "la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Podrá adoptar diversos procedimientos para conseguir su fin pero, en el fondo, la democracia está siempre vinculada con el pueblo, como su origen y destino. Así concebida y definida, la democracia se opone radicalmente a cualquier forma de autocracia, en la cual el gobierno está en manos de un hombre o de un grupo, del cual emanan las decisiones de poder y las normas jurídicas que rigen al país. El pueblo, en este caso, queda marginado, y sólo es tomado en cuenta para fines publicitarios.

Desde muy antiguo, la humanidad ha conocido las formas autocráticas de gobierno. Son, por así decirlo, como las organizaciones que corresponden a la infancia de los pueblos, en la cual éstos no tienen capacidad para gobernarse y necesitan que alguna persona o grupo los conduzca. Así lo muestra la historia en los pueblos del antiguo Oriente y en los pueblos primitivos de América y otros continentes. La democracia, en cambio, aun cuando tiene también raíces antiguas, aparece más tarde en la evolución de los pueblos. Se presenta en los periodos de mayor

madurez en la historia de las civilizaciones, cuando las sociedades tienen mayor conciencia de sus derechos y posibilidades, y los hombres sienten que pueden decidir por sí mismos de sus propios destinos. Esto ocurrió, por ejemplo, en la civilización mediterránea de la antigüedad, en Atenas, después de las guerras médicas, cuando floreció de una manera espléndida la cultura material y espiritual en el siglo de Pericles. Y volvió a ocurrir en Roma, después del triunfo sobre los cartagineses, cuando prosperaron las instituciones republicanas y, mediante la armonía y la colaboración entre el senado y el pueblo, llegaron los romanos a dominar al mundo. Fueron épocas de madurez, en la que los pueblos llegaron a la autoconciencia y a la autodecisión.

Y esto pone de relieve ante nuestros ojos que la democracia llega y se mantiene cuando los hombres se dan cuenta de sus responsabilidades y de sus derechos, y están dispuestos a luchar por ellos. Cuando saben y sienten que para ser libres deben estar constantemente alertas para evitar que hombres y grupos ambiciosos se adueñen del poder y los esclavicen. Si los ánimos se reblandecen y la vigilancia se afloja, la democracia decae y surgen de nuevo las formas autocráticas. Esto sucedió en el mundo antiguo, cuando Grecia perdió su independencia y cuando Roma, abandonadas las prácticas republicanas, cayó en el absolutismo imperial.

En la edad media, la democracia vivió larvada, en los largos siglos de lucha contra las invasiones y el desmembramiento del poder político. Pero cuando la situación se fue estabilizando y comenzaron a desarrollarse las ciudades, con su comercio, su industria artesanal y sus universidades, volvieron a aparecer las instituciones democráticas, bajo la forma de parlamentos, cortes, fueros, procesos judiciales y, sobre todo, de ayuntamientos, como primera forma de enlace entre el pueblo y el gobierno. Aparecieron también las primeras declaraciones de derechos contra el absolutismo regio. Testimonio de ello son los documentos que aún existen en los archivos y museos y los magníficos edificios municipales que aún se ven en muchas ciudades de Europa.

La incipiente democracia medieval —de la cual había todavía tantos vestigios en la España renacentista— decayó,

por desgracia, a mediados del siglo XVI, cuando los reyes absolutos fueron consolidando su poder en los grandes países europeos como Inglaterra, Francia y España. Volvieron los pueblos a quedar dominados por los monarcas y a pasar a un lugar secundario y pasivo en la vida política. Fue necesaria una larga lucha para que, lentamente, ocuparan de nuevo su lugar de protagonista principal en el ejercicio del poder político. Y eso sólo se logró a base de grandes revoluciones: la inglesa del siglo XVII, la de independencia norteamericana del siglo XVIII y la revolución francesa de 1789. A principios del siglo XIX el ideal democrático fue abriéndose paso con mayor decisión en los países del mundo occidental. Y también en los de América, recientemente independizados de sus metrópolis. No fue fácil el proceso de democratización. Tuvo que luchar contra la persistencia de las ideas absolutistas y de las desigualdades provenientes de los privilegios de ciertas clases sociales. Hubo necesidad de ir perfeccionando las prácticas electorales para eliminar los residuos de viejas tradiciones para poder llegar a un sufragio verdaderamente universal y sin restricciones. Hacia fines del siglo pasado y comienzos del XX, en casi todos los países civilizados del mundo se admitía, al menos, una democracia política formal, rodeada de todo el aparato de protección del estado liberal de derecho.

Las fuertes convulsiones mundiales del siglo XX, de carácter político y económico, y también ideológico, que desembocaron en las dos grandes guerras, tuvieron un recio impacto en la vida democrática de los pueblos. En muchos de ellos la democracia entró en crisis y las formas autocráticas volvieron a ganar terreno. Ya sea bajo el aspecto del fascismo militarista o bajo la del comunismo totalitario, las prácticas antidemocráticas se fueron imponiendo y la libertad política se fue apagando.

En los tiempos que corren, el mundo se ha ido dividiendo cada vez más en países democráticos y países autocráticos. Las formas de realización son muy variadas y hay numerosos matices que marcan, a veces, hondas diferencias. Hay países que mantienen sus viejas formas democráticas, como Inglaterra, Francia y Estados Unidos; otros que conservan una democracia formal, al menos en el texto de sus leyes fundamentales; y otros que abiertamente adoptan el modelo de socialismo autoritario

(o comunismo totalitario, como debería mejor llamársele) forjado por la URSS e impuesto a sus países satélites, tanto en Europa como en América y otros continentes.

En la prensa y en otros medios de comunicación social, así como también en conferencias y cursos universitarios, se habla de países del primer mundo y del tercer mundo (generalmente sin mencionar los del segundo mundo); de países alineados y no alineados; de países del este y del oeste, del norte y del sur. Y al hablar así se incurre en grandes ambigüedades, porque se manejan —sin aclararlos— criterios muy diferentes. Unas veces son de carácter económico, otras de carácter político y otras de índole ideológica. En el fondo, y prescindiendo de su grado de desarrollo económico —países industrializados o países subdesarrollados o en vías de desarrollo— lo que en verdad importa para clasificar a un país es si lleva una vida democrática, al menos en sus niveles mínimos, o si está dominado por una forma autocrática de gobierno.

La democracia genuina lleva siempre el sello de su arraigo popular. Los presupuestos en que se basa se remontan a lo más hondo de una filosofía del hombre y de la sociedad que ve en cada ser humano una persona investida de una dignidad eminente, por su racionalidad y libertad, y con un destino individual, propio e incommunicable. Según esta filosofía antropológica y social, el hombre tiene deberes para con la sociedad en la que vive y está obligado a subordinarse a las exigencias del interés general o bien común, pero también tiene derechos, derivados de su propia naturaleza racional y capaz de autodecisión, que lo colocan por encima de la sociedad. Ésta, entonces, en el terreno de los valores supremos de la vida humana, debe servir al hombre en la realización de sus fines existenciales, como un instrumento apto y adecuado. Los fines de la sociedad y sus valores propios no pueden ni deben estar más allá o en un nivel superior, a los de la persona humana. En definitiva, es el hombre, con su razón y libertad, el que predomina y no la sociedad, con todo su instrumental jurídico y político.

Y esto no significa un individualismo a ultranza. Al contrario, el hombre, colocado en el lugar correcto que debe ocupar en la jerarquía de fines y valores, es un sujeto naturalmente

sociable y comunitario que tiene fundamentales deberes de solidaridad con sus semejantes y alcanza la plenitud de su ser en sociedad con sus compañeros en la aventura del destino común. De aquí la huella profundamente social de todos sus actos y empresas: de su trabajo, de su familia, de su propiedad, de su educación, de sus actividades económicas, de su participación en la vida política.

Es, pues, un presupuesto básico de la democracia la dignidad de la persona humana, racional y libre. Y con ello el derecho de buscar la verdad a su manera y manifestar sus opiniones libremente, sin más límites que las normas morales y el derecho que tienen los demás. De aquí nace el pluralismo ideológico y la obligación jurídica y moral que tiene el estado de respetar las opiniones de sus agrupados. Un estado que quiera imponer una ideología oficial única a los miembros de su población deja automáticamente de ser democrático para caer en la autocracia.

El pluralismo ideológico supone pluralidad de organizaciones cívico-políticas por medio de las cuales los ciudadanos manifiestan su opinión. Y esas organizaciones deben gozar de igualdad y libertad ante la ley, de tal manera que no haya ninguna que sea más favorecida por el estado que otra. Lo mismo se diga de los medios masivos de comunicación social: prensa, cine, radio, televisión, publicidad.

La democracia verdadera no puede existir sin libertad, igualdad y pluralidad. Y debe estar acompañada por todas las seguridades jurídicas del estado de derecho, que con tanta dificultad se han conquistado a lo largo de los años: una constitución escrita y rígida; un conjunto de derechos públicos subjetivos de los ciudadanos, o garantías individuales, reconocidos por la constitución; una exigencia constitucional de que todos los actos de la administración pública estén regidos por el principio de legalidad; una efectiva separación de poderes que asegure el equilibrio y evite los abusos; una organización electoral que permita la efectiva libertad de sufragio; un respeto al pluralismo ideológico y a la diversidad de grupos de opinión y de presión; y un conjunto de recursos jurisdiccionales y administrativos para corregir los excesos y abusos del poder público. Pueden llegar, en algunos países, hasta el juicio constitucional o juicio de amparo, como en México.

Tales son los presupuestos de toda democracia constitucional en nuestros tiempos. De aquí se derivan sus postulados, sus exigencias. La democracia, para existir y mantenerse operante, pide un reconocimiento constante del principio de que la soberanía del estado se origina en el pueblo y se ha de ejercitar en beneficio de éste. O sea, que se distinga con claridad, en el binomio estado-sociedad, lo que pertenece a cada uno y la continua interpenetración entre ambos. La consecuencia de esto es la diferenciación entre la simple legalidad y la legitimidad de los actos del poder público. No basta con que se ajusten a las leyes positivas. Es necesario que reciban el constante refrendo de la voluntad popular.

Otro postulado es el del respeto de los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos, en toda su amplia gama. Y especialmente el derecho de manifestar la propia opinión con toda libertad y el de disentir de las opiniones y procedimientos del gobierno. Sin ello, el estado sería absolutista y opresor. Y con esto vendría aparejado también el derecho a participar en los diversos organismos que de un modo u otro ejercitan la autoridad en la comunidad estatal.

Los presupuestos y postulados de la democracia son los caracteres que configuran su fisonomía y nos permiten reconocerla. Donde los encontramos, allí hay democracia; donde no, allí no hay democracia, aun cuando formalmente las leyes del país la establezcan.

El régimen democrático viene siendo así no sólo una forma de gobierno, sino todo un estilo de vida política y social. Es el estilo de vida que corresponde a la madurez de un pueblo que decide sus destinos con plena libertad, responsabilidad y conocimiento de causa. Es una manera de vivir y de comportarse que afecta prácticamente a todas las actividades que se llevan a cabo en la convivencia humana, desde la educación de la niñez hasta los actos más trascendentes del hombre adulto. Corresponde, en la actualidad, a ese régimen mixto en el que los políticos de otros tiempos querían encontrar la forma ideal de gobierno, gracias al equilibrio de los elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos.

Pero la democracia, desde sus comienzos, no ha carecido de riesgos y desviaciones. Ya los grandes filósofos griegos de la

antigüedad, Platón y Aristóteles, entre ellos, señalaban los peligros de que el gobierno popular, rectamente encaminado a la realización del bien común, pudiera degenerar en un gobierno de masas, de multitudes, en el que la voluntad popular pudiera ser falseada por los demagogos; y en el que, por lo tanto, el bien común quedara sustituido por el bien particular de los jefes populares. Y la experiencia histórica ha demostrado que así ha sucedido en muchas ocasiones en la vida de los pueblos. La democracia, mal entendida y practicada, ha conducido a la tiranía de un hombre o de un partido que, levantando la bandera de los derechos populares, ha cambiado los genuinos intereses de los individuos y de los grupos sociales por el interés propio, lleno de codicias y ambiciones.

De la democracia como ideal se ha pasado a una demagogia real. Y esa ha sido, por desgracia, la triste historia de muchos pueblos, especialmente aquellos que por su juventud y su falta de preparación cívica no han sabido o podido llegar a la madurez necesaria para conocer bien los presupuestos y postulados democráticos y defenderlos contra los ataques insidiosos de los enemigos.

Alcanzar la democracia y vivirla plenamente supone un esfuerzo repetido cotidianamente, una lucha continua por la libertad, el derecho y la justicia. Y eso supone un espíritu iluminado, alerta y decidido, que no siempre es fácil alcanzarlo, a nivel de pueblos. Pero es un reto al que vale la pena enfrentarse.

Los adjetivos de la democracia

La democracia, en cuanto tal, no necesita calificativos. O es, simplemente, o no es. El distinguido historiador mexicano Enrique Krauze escribió un interesante artículo (en la revista *Vuelta*, del mes de enero de 1984), intitulado "Por una democracia sin adjetivos". El solo título nos habla de la intención del autor. Y el contenido del artículo es extraordinariamente valioso para hacer una apreciación crítica del sistema político mexicano.

No vamos a hacer aquí un examen de ese artículo. Vamos simplemente a tomar pie en el título para explicar que si bien es cierto que la democracia, en sí, no necesita adjetivos, también lo es que en la época contemporánea, sobre todo a partir de la

revolución francesa, ha tenido ciertos matices en su realización que permiten calificarla mejor y alcanzar su concepto auténtico. A esos matices nos vamos a referir con el nombre de "los adjetivos de la democracia".

Hay que distinguir, ante todo, entre la democracia formal y la democracia real. La primera es la que está organizada y funciona según los lineamientos establecidos en los preceptos legales. Sus procedimientos están fijados, en gran parte, por las normas constitucionales, y en otra medida, no menos importante, por las leyes reglamentarias que se derivan de esas normas. En el terreno jurídico esa democracia puede ser muy perfecta y para mejorarla bastará con que se reformen las normas legales. La democracia real, en cambio, es la que existe, de hecho, en el país. La sociología política, mediante sus análisis estructurales y coyunturales, la describe y da a conocer. Nos habla de los grupos de poder que realmente existen e influyen en la vida política; del grado de participación del pueblo en las elecciones y de la medida del abstencionismo electoral; y de los factores que corrompen la pureza del proceso democrático. La historia política viene a corroborar los datos sociológicos y a situarlos en su perspectiva temporal. Por ejemplo, la vida democrática en México durante la presidencia del general Porfirio Díaz.

Fijándonos en su recorrido histórico, especialmente en los dos últimos siglos del desarrollo del mundo occidental, nos encontramos con que la democracia ha sido influida, como es natural, por la filosofía política imperante. Fue, primeramente, la filosofía individualista y liberal del siglo XIX la que la marcó con su huella. La democracia estaba basada en la concepción antropológica de Rousseau y de los enciclopedistas franceses, conforme a la cual la sociedad estaba compuesta de hombres libres e iguales: los ciudadanos, considerados como átomos de la sociedad. Por otra parte, imperaba el ideal de la libertad sin restricciones. Había que evitar las trabas que para el comercio y la industria significaban las sociedades intermedias y dar rienda suelta a las indicaciones del liberalismo económico. Así se originó la democracia individualista y liberal, que, en el fondo, sirvió a los intereses de la naciente clase burguesa.

Esta forma de democracia, con su parlamentarismo peculiar, con su multiplicidad de partidos políticos, con sus intermi-

nables discusiones y con su corrupción electoral, fue duramente criticada por los políticos del siglo XX. Después de la primera guerra mundial, algunos de los pueblos europeos más duramente castigados por el conflicto bélico, como Rusia, Alemania e Italia, se orientaron hacia el estado totalitario, después de hacer duros ataques contra la democracia hasta entonces imperante. Otros países, influidos por las ideas nacionalistas y corporativistas que entonces estaban en boga, prefirieron corregir los rumbos de la democracia antes que caer en el estado totalitario. Y así, en Portugal, por los años de 1926 y 1928 llegó al poder el profesor universitario Antonio de Oliveira Salazar, quien instauró, mediante las debidas reformas legales, una nueva forma de estado, el estado corporativo portugués, que era el fruto y la expresión de la llamada "revolución nacional". En este estado, se pretendía instaurar una especial forma de democracia a la que se denominaba "democracia orgánica" o "funcional", basada en el sufragio familiar y corporativo, por medio de la cual se deseaban subsanar los errores y fallas de la democracia individualista y darle una importancia predominante al elemento comunitario. Se formaba una cámara corporativa al lado del senado.

Por la misma senda se orientó la revolución nacionalista española encabezada por el general Francisco Franco, aunque con sus modalidades propias. Al triunfo de esa revolución en abril de 1939, el régimen franquista fue paulatinamente transformando el régimen político español para convertirlo en una "democracia orgánica", basada también en los grupos fundamentales de la vida social: familias, municipios, sindicatos, organizaciones eclesiásticas. Hacia los últimos años de la dictadura personal de Franco, se dieron leyes para organizar lo que se llamaba "el Reino", que comprendían las relativas a las Cortes y a los procesos electorales. Se quería dar forma a una nueva democracia en la que, sin intervención de partidos políticos, el pueblo español pudiera participar en la vida política por medio de sus organizaciones naturales.

Los experimentos políticos de Portugal y España buscaron, pues, una nueva forma de democracia que no tuviera los defectos del demoliberalismo, basado en el individuo aislado, el ciudadano, sino que acercara a los hombres a los organismos en

los que naturalmente vive, trabaja y desarrolla su actividad política, o sea, la familia, el sindicato y el municipio. Se instituyó un nuevo modo de sufragio, el sufragio "orgánico", por medio de la cual se llegará a una democracia también "orgánica" o "funcional". Esos ensayos democráticos fueron, sin duda, muy interesantes y en muchos aspectos positivos. Por desgracia nacieron y vivieron al amparo de dictaduras personales —la de Oliveira Salazar, en Portugal; la de Franco, en España— que al restringir las libertades cívicas y políticas en sus respectivos países fueron repudiadas por el pueblo y sustituidas, a la muerte de los dictadores, por otros regímenes políticos.

La democracia orgánica quedó así en el transfondo de las instituciones políticas en espera de mejores tiempos. Quizá algún día pueda prestar buenos servicios si se le asocia con la libertad política proveniente del pluralismo ideológico de una genuina democracia. La idea organicista, bien entendida, ha seguido inspirando diversos movimientos en la actualidad, en los que se pone de relieve la importancia y necesidad de la solidaridad humana en la vida social y política.

Al terminar la segunda guerra mundial y reorganizarse el mundo de acuerdo con nuevos esquemas jurídico-políticos, la democracia fue adquiriendo también nuevos calificativos. La tradicional democracia individualista y liberal recibió el adjetivo de "clásica" de acuerdo con las normas y patrones a que se habían ajustado los procesos democráticos, desde el siglo XVIII, en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Y a los estados de los diversos continentes que adoptaron este modelo, al menos formalmente, se les llamó países de "democracia clásica". El esquema era el del viejo estado liberal de derecho, aunque con renovaciones y actualizaciones que imponían las circunstancias. Esas renovaciones iban por la línea de un neoliberalismo reformista, en el que había una mayor intervención del estado en el régimen de la propiedad, del trabajo y de la distribución de la riqueza.

Una modalidad, dentro de esta democracia clásica, era la del socialismo democrático, adoptado por diversos estados del mundo occidental, como Inglaterra, con el partido laborista y los gobiernos emanados de su triunfo electoral; Alemania Federal y Austria, con sus partidos socialdemócratas; y los

países escandinavos, con su régimen político-económico de “bienestar social” (*Welfare State*). Más recientemente han entrado por este camino Francia, con el triunfo del socialismo de Mitterrand, y España, con el acceso al gobierno del Partido socialista obrero español (PSOE).

Otra calificación de la democracia en los años que siguieron al triunfo de los aliados, fue la de la “democracia cristiana”, que tuvo vigencia por un largo periodo en Italia, con el gobierno de Alcide de Gasperi, y en Alemania Federal, con el liderazgo del viejo canciller Konrad Adenauer. A esa democracia, inspirada en la doctrina cívico-política de la iglesia católica, expuesta en las encíclicas de los papas, y especialmente en las alocuciones radiofónicas de Pío XII, se le aplicó también el título de “democracia social”, de inspiración cristiana. En este tipo de democracia hay un mayor respeto a la libertad personal y a la iniciativa privada, sin que se deje de reconocer la necesidad de la intervención estatal en los procesos económicos. Pero esa intervención debe estar normada por los principios de solidaridad y subsidiariedad, a fin de evitar cualquier totalitarismo estatal.

Dentro de esta modalidad democrática se ha desarrollado la democracia cristiana en dos países sudamericanos, Chile y Venezuela, con el nombre de democracia comunitaria y también democracia “participativa”. Con este último título escribió un magnífico artículo el profesor Lino Rodríguez-Arias Bustamante, de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela (en la *Revista iberoamericana de autogestión y acción comunal*, editada en Madrid y aparecida en el otoño de 1983). Para él, esta especie de democracia participativa habrá de reunir las siguientes notas distintivas: 1) democracia con autoridad, respetuosa de la libertad a la vez que garante efectiva del orden social; 2) democracia eficaz, capaz de enfrentar idóneamente los problemas sociales y administrativos; 3) democracia con dinamismo, ajena al anquilosamiento de las estructuras políticas, abierta al cambio necesario y dispuesta a adoptar en su propio organismo las modificaciones que los tiempos reclaman, para no constituir en sí misma un obstáculo a las soluciones de emergencia.

Se habla, pues, de democracia social, económica, igualitaria, comunitaria, participativa y otros epítetos más. Pero lo

importante es que se trata siempre de la democracia. Cuando no existe la democracia, aun cuando se emplee el término para designar al estado o la forma de gobierno, sucede como en los actuales estados de socialismo autoritario, en los cuales ni existe libertad política para los ciudadanos, ni el derecho de disentir de las decisiones gubernamentales o de la ideología oficial, ni la facultad de formar partidos políticos que representen el verdadero sentir popular. Son estados en los que predomina una oligarquía, agrupada en el partido oficial, que no permite oposición alguna. Resulta verdaderamente irónico llamarlos “república democrática” o “república popular”, cuando no son más que dictaduras disfrazadas o formas muy claras de absolutismo autocrático.

Hay así múltiples adjetivos de la democracia, si se toman en cuenta sus diversas formas de realización. Pero, en el fondo, hay que luchar por una democracia auténtica, por una democracia “sin adjetivos”, como dice Krauze. Lo importante es que los pueblos sepan vivir con libertad, dignidad y justicia. Y que sepan defender los valores democráticos contra todos sus enemigos.

Forma y realidad de la democracia en México

Viniendo ahora al caso de México, hemos de tomar en cuenta todos los principios, reflexiones y datos históricos que hasta aquí hemos expuesto para apreciar y valorar la vida política en nuestro país. Como lo dijimos en un principio, vamos a situarnos en una perspectiva filosófico-política, en la que podamos juzgar serena y objetivamente los hechos, ajenos a toda posición partidista.

Durante el porfiriato, se institucionalizó en México un curioso fenómeno político: el de los gobiernos personalistas de los presidentes en nombre de la constitución, pero al margen de la misma. El jurista mexicano Emilio Rabasa le llamó “la Constitución y la dictadura”.

El estado mexicano parecía definitivamente configurado en estos años como un típico estado de derecho liberal-burgués. Pero había una inmensa distancia entre el formalismo jurídico

que aparecía en la letra de la constitución y la realidad política y socio-económica del pueblo mexicano. Esta realidad, desbordante en sus exigencias de justicia social, chocó con el formalismo liberal y rompió sus moldes en la revolución de 1910. Durante muchos años se dio en México una sangrienta lucha armada entre diversos grupos que ya no buscaban tanto la forma de gobierno como dar cauce legal a las aspiraciones de justicia y bienestar económico de los grandes grupos de obreros y campesinos. Al cabo de seis años de violentas pugnas, se reunió al fin un congreso constituyente en Querétaro que, bajo la égida de Venustiano Carranza, promulgó al fin una nueva Constitución el 5 de febrero de 1917. Esta ley fundamental reconocía, por vez primera en el mundo, los derechos de los trabajadores como clase social, en sus artículos 27 y 123.

Con esta nueva constitución, el estado mexicano, sin dejar de ser un estado de derecho, asumía la forma de un estado social de derecho y ya no liberal. Parecía abrirse para el pueblo mexicano una fundada esperanza de que al fin habría coherencia entre los textos constitucionales y las aspiraciones de libertad política y de equitativo reparto de la riqueza. Por desgracia, las viejas prácticas de dictadura constitucional siguieron adelante con los gobiernos revolucionarios y se ha ido consolidando, en las últimas décadas, un presidencialismo de gran intensidad, que aprovechando la constitución va más allá de ella y la transforma según los planes y requerimientos de la política del presidente en turno.

Así, el estado mexicano, surgido desde la época de la independencia como fruto de duras y sangrientas luchas, ha llegado a ser —al menos en la letra del texto constitucional— un estado democrático, representativo y federal. Pero, la realidad mexicana, ¿responde a ese esquema jurídico-político? Aquí cabría distinguir entre el derecho político y la sociología política mexicana. El sociólogo mexicano Pablo González Casanova, en sus interesantes libros *La democracia en México* y *México, hoy*, ha puesto de relieve la enorme disparidad entre los factores reales del poder y la democracia formal que aparece en la constitución. Cabría referirse a ellos para tener una idea clara del problema, aun cuando no se acepten todos los supuestos y conclusiones del sociólogo.

Haciendo una reflexión acerca de la democracia en nuestro país, podemos ir recordando y ponderando cómo se ha formado y desarrollado a lo largo de los años. La democracia, en cuanto régimen de plena libertad política y de responsabilidad ciudadana, que supone la edad de la razón y de la madurez, no existía, ni podía existir, en los comienzos de la independencia. El pueblo mexicano, acostumbrado a trescientos años en los que no tuvo voz ni voluntad propias, no podía súbitamente despertar a la vida democrática. Por muchos años siguió siendo un menor de edad al que no le quedaba otra cosa que “callar y obedecer”. Permanecía al margen de las luchas políticas y constituía la gran mayoría silenciosa. Venían realistas e insurgentes, monárquicos y republicanos, federalistas y centralistas, liberales y conservadores, liberales puros y moderados, partidarios de la dictadura presidencial y enemigos de la misma, y el pueblo, con sus clases trabajadoras y clases medias, casi no participaba en esas luchas. Eran luchas de grupos y facciones.

Así permaneció hasta 1867, cuando triunfó definitivamente la república y se instauraron las dictaduras constitucionales. En ese largo periodo, de cerca de medio siglo, la situación política del pueblo mexicano siguió siendo más o menos la misma: de espectador pasivo de las luchas de las oligarquías que trataban de conquistar el poder, juaristas, lerdistas, porfiristas. En ese tiempo, un alto funcionario acuñó la cínica, pero realista frase: “si las elecciones no las hace el gobierno, ¿quién las va a hacer?” No había partidos políticos bien estructurados y con programas definidos y prácticos, que expresaran el verdadero sentir del pueblo. Los partidos que se estilaban entonces eran grupos que se formaban desde las alturas del poder público, para la conquista del poder, y que expresaban, tan sólo, las ambiciones de las distintas facciones que se movían dentro del ambiente gubernamental. El pueblo seguía siendo la eterna mayoría silenciosa.

Durante los treinta años del porfiriato, el pueblo mexicano permaneció, más que nunca, al margen de la vida política. El dictador había instaurado una política de conciliación nacional que había traído paz y seguridad para el país. Y además, una brillante prosperidad económica. Había “poca política y mucha administración”. Los altos funcionarios de la federación eran

designados, personalmente, por el presidente de la república, y lo mismo la mayoría de los gobernadores. Había, nominalmente, algunos partidos políticos, pero seguían siendo los mismos grupos organizados desde el poder; y en todas las elecciones triunfaba el partido oficial. El grupo realmente gobernante era el de los "científicos", grupo íntimamente allegado al general Díaz. Si llegaba a haber alguna pequeña oposición, era aplastada implacablemente.

Cuando en 1908 el periodista norteamericano Creelman entrevistó al presidente Díaz le hizo, entre otras, la pregunta de si consideraba que el pueblo mexicano estaba maduro para la democracia. Y el general Díaz dijo que sí y que él daría garantías para que la opinión pública se pudiera expresar con toda libertad. Pero en las elecciones de 1910 volvió a realizarse la misma imposición oficial de siempre: volvió a triunfar el propio Díaz y el candidato que él imponía para vicepresidente, Ramón Corral. Esto desbordó la copa de la ira popular y fue causa —entre otras muchas— de la revolución de 1910.

A la caída del general Díaz (su renuncia fue en mayo de 1911), sobrevino en México un corto periodo, casi único en su historia, de verdadera democracia. Fue el periodo maderista, de 1911 a 1913. En ese periodo el pueblo mexicano pudo expresar libremente su voluntad y llevar a las cámaras del Congreso de la Unión a genuinos representantes suyos. Por lo menos en el aspecto político brilló fugazmente la democracia en nuestro país. Pero el brillo fue efímero. Pronto el traidor general Victoriano Huerta usurpó la presidencia de la república, mandó matar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y restauró las prácticas dictatoriales.

Contra Huerta se levantó Venustiano Carranza, en nombre de la legalidad. Otros caudillos revolucionarios surgieron por diversas partes: Villa, Zapata, Obregón. La lucha armada se generalizó en casi todo el territorio mexicano. Al fin se impuso la facción carrancista y convocó al congreso constituyente de 1916. En 1917 se promulgó la nueva Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se proclamaba, en términos solemnes, que México era una república democrática, representativa y federal. Y se decía que "la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo". En esta época de lucha armada, el

pueblo permanecía, como siempre, marginado. La lucha era entre las facciones revolucionarias.

Con la promulgación de la Constitución de 1917 y la presidencia de Carranza hubo un cierto intento de orden constitucional y de vida democrática. En realidad siguió el predominio de los caudillos: primero fueron los del grupo sonorenses, De la Huerta, Obregón y Calles; después, el de Michoacán, con Lázaro Cárdenas. Calles, hábilmente, unificó a los diversos grupos políticos revolucionarios y les dio, en 1929, un partido oficial que los representara: el Partido Nacional Revolucionario. Y desde entonces ha seguido siendo el partido oficial, el partido del gobierno mexicano, aunque ha ido tomando diversos nombres a lo largo de más de 50 años de hegemonía.

A partir del gobierno del general Manuel Ávila Camacho la revolución mexicana entró en una etapa de mayor tranquilidad e institucionalización, que ha perdurado hasta nuestros días. En esta agitada vida política de México en el siglo XX, los intentos democráticos del pueblo mexicano han sido numerosos, pero no siempre han tenido el éxito que esperaban. Sigue vigente la antinomia entre la democracia formal —la que aparece en los textos constitucionales y legales— y la democracia real, la que se da de hecho en la vida de la sociedad mexicana. Un minucioso análisis sociológico y político del funcionamiento del gobierno mexicano y de los procesos electorales nos permitirá, en cada caso, resolver si hay armonía o antinomia entre lo formal y lo real en la democracia nacional.

Educación para la democracia

Lo que sí podemos resolver desde ahora, a la luz de una reflexión filosófico-política de la historia y de la realidad de nuestra nación, es que la democracia —la auténtica, la verdadera, la que no tiene disfraces— ha sido y seguirá siendo el ideal por el que ha luchado el pueblo mexicano desde que obtuvo su independencia. No quieren los mexicanos ni dictaduras militares ni dictaduras de partido; ni oligarquías ni socialismos autoritarios o formas más o menos larvadas de totalitarismo. Quieren una sana, genuina y firme democracia. Una democracia que puede

tener defectos, como toda institución humana, pero que es siempre perfectible, mientras no se le pongan obstáculos.

¿Cómo lograr esta democracia en México? Hay que rechazar, ante todo, los caminos violentos para obtenerla. La violencia engendra violencia y no llega a ningún resultado positivo. Los métodos violentos podrán ser útiles e incluso necesarios para obtener un resultado inmediato en situaciones desesperadas, pero no para lograr efectos permanentes y valiosos. Las cosas que valen se van obteniendo por una evolución lenta y bien dirigida, mediante la creación de hábitos y la adquisición de virtudes, por el esfuerzo continuado para llegar a las metas superiores.

La democracia, como ya lo hemos visto, no es nada más una forma de gobierno, sino un estilo de vida. Una forma de vivir y comportarse a la que sólo se llega por un proceso de maduración y autoconciencia. Implica un gran sentido de responsabilidad y una decisión, constantemente renovada, de sacrificarse por el bien común. Y con ello un gran valor para defender —aun con la vida misma— la libertad y la justicia. Supone una actitud de crítica y de inconformidad y una permanente lucha por el derecho, pero sin violencias ni excesos. Lo que importa es la constancia. No quitar el dedo del renglón cuando se trata de salvaguardar los derechos del pueblo, como lo hizo Gandhi en la India.

Por estas razones, la democracia es un ideal difícil de alcanzar. Pero no una utopía imposible. Si hay decisión firme de lograrlo y se aprovechan al máximo los recursos humanos —de la mente, de la voluntad, del afecto, del esfuerzo cotidiano en el trabajo—, puede muy bien realizarse. Hay que partir de una base innegable: la educación de la población del país para que llegue a ser un auténtico pueblo. No un rebaño de borregos, no un conglomerado de esclavos, no una masa amorfa sin capacidad de determinación y decisión, sino un grupo de hombres libres, conscientes y responsables. Iluminados, alertas y decididos. Ya lo había sostenido Platón en su gran diálogo de *La República (Politeia)*: para llegar a un óptimo régimen político hay que educar a los ciudadanos. Sin educación, los hombres y mujeres de un país no pasan de ser eternos niños, sujetos siempre a los mandatos despóticos de los gobernantes.

La educación para la democracia —que en el fondo es la educación para la libertad— comienza desde la niñez. Hay que hacer ver al niño cuáles son las razones para que actúe en determinada forma. Hay que inculcarle que debe proceder por convicción y no nada más por el miedo al castigo o el halago de la recompensa. Hay que hacerle sentir su responsabilidad frente a los demás. Es imperativo que caiga en la cuenta que no debe vivir nada más para sí mismo, para la satisfacción de su egoísmo, sino para el bien de los que lo rodean. Tal vez al principio no se dé cuenta bien de esto, pero poco a poco se le irá formando el hábito de ayudar, servir y encontrar gozo en hacer algo bueno por los otros.

Al llegar a la adolescencia y a la juventud, el ser humano debe ir desarrollando un profundo sentido social. Se le debe fomentar su conciencia crítica, su responsabilidad, su compromiso frente a los valores individuales y sociales y su decisión de luchar siempre por la justicia y el derecho. Con este espíritu debe pasar por la educación media y preparatoria hasta llegar a la mayoría de edad. Es conveniente que en estos años de formación física y espiritual el joven aprenda a participar en los organismos estudiantiles representativos de los intereses colectivos: consejos, asambleas, sociedades de alumnos. Y se entrene para exigir el cumplimiento de las normas legales y estatutarias de la institución a que pertenece y con ello el respeto a su libertad de elección y al ejercicio de sus derechos.

Siendo ya un ciudadano, por haber alcanzado la edad señalada en la ley fundamental del país, el joven debe participar activamente en todos los procesos electorales. Debe sentirse comprometido con el bien público nacional y solidario con los demás miembros de la comunidad en la lucha por alcanzarlo. Y si siente con mayor intensidad la vocación política, debe escoger el partido político que mejor responda a sus intereses y represente sus ideales. Ha de estar siempre alerta para ejercitar tres actividades básicas: ver, juzgar y decidir. Debe combatir la abulia, la apatía, la falta de interés, que llevan al abstencionismo y ha de estar siempre dispuesto a combatir con valor civil todas las circunstancias adversas de la vida política y los ataques contra el derecho, la justicia y las libertades públicas.

La lucha cívica y política en la democracia tiene que ser permanente. No se agota con los actos de un determinado proceso electoral. Ni se manifiesta, esporádicamente, cada determinado número de años. Es una actitud de espíritu que acompaña al hombre en todos los momentos de su vida cotidiana. Lo mismo cuando escribe una carta de protesta para que se publique en un periódico que cuando manifiesta su disgusto, por las vías legales, contra las tarifas excesivas de los servicios públicos o el alza indebida de los artículos de primera necesidad. Hay múltiples formas de resistencia pasiva y activa. Y todas ellas deben ser realistas y prácticas. No debe haber “ilusos ni desilusionados” en la pugna democrática.

Los peores enemigos de la democracia no son los partidos totalitarios, sino los vicios y defectos internos que corroen el espíritu cívico del hombre: la pereza, la cobardía, el egoísmo, la codicia, la corrupción. La transmutación de los valores de la vida social: el cambiar por valores pragmáticos y de conveniencia inmediata los valores morales y jurídicos más profundos de la convivencia humana. Cuando esto sucede, nada hay que pueda salvar a un país de la decadencia y de la dictadura. Entonces se podrá decir a los ciudadanos lo que la madre del rey moro le dijo a la caída de Granada: “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”.

Tales son las características de una educación para la democracia. Y con ellas las reglas técnicas para obtener los mejores hombres en el gobierno. Hay que saber combinar las dos facetas de la política: la política como arte y la política como técnica. Pero hay que recordar que lo más valioso son las virtudes políticas de gobernantes y gobernados.

Cuando en México entremos por la senda de una verdadera educación democrática; cuando los integrantes del pueblo mexicano sepamos ejercitar, madura y responsablemente, nuestros derechos cívicos y políticos, cuando estemos dispuestos a perderlo todo y aun a dar la vida por la defensa de la libertad, la justicia y los derechos públicos, cuando sepamos utilizar todos los medios pacíficos y legítimos para luchar contra las arbitrariedades y despotismos, cuando no dejemos pasar por alto ningún abuso de poder, ni ningún intento por restringir las genuinas libertades populares; entonces, sin duda

alguna, habremos conquistado la democracia y sabremos mantenernos en ella. Aunque sea una lucha de años. Seremos el pueblo democrático que hemos querido ser desde el principio de nuestra vida independiente.

Referencias bibliográficas

Una breve referencia bibliográfica acerca de los temas que se tratan en este artículo es la siguiente:

- Carpizo, Jorge, *El presidencialismo mexicano*, Siglo XXI, México 1979.
- Córdova, Arnaldo, *La formación del poder político en México*, Siglo XXI, México 1972.
- , *La ideología de la revolución mexicana*, ERA, México 1973.
- Cosío Villegas, Daniel, *El sistema político mexicano*, Joaquín Mortiz, México 1973.
- García Cantú, Gastón, *Política Mexicana*, UNAM, México 1979.
- González Casanova, Pablo, *La democracia en México*, ERA, México 1965.
- , y Enrique Florescano (comps.), *México, hoy*, Siglo XXI, México 1979.
- González Uribe, Héctor, "Bases ontológicas y éticas de una nueva filosofía democrática" en *Logos. Revista de Filosofía*. (Universidad Lasalle, México), núm. 24, 1980.
- Krauze Enrique, *Caudillos culturales de la Revolución Mexicana*, Siglo XXI, México 1976.
- , "Por una democracia sin adjetivos", en *Vuelta* (México), enero de 1984.
- Moreno, Daniel *Los partidos políticos del México contemporáneo*, México 1970 (edición del autor).
- Paz, Octavio, *El laberinto de la soledad*, FCE, México 1959.
- , *El ogro filantrópico*, FCE, México 1978.
- , *Tiempo nublado*, Seix Barral, México 1983.
- Rodríguez-Arias Bustamante, Lino, "La democracia participativa", en *Revista iberoamericana de autogestión y acción comunal* (Madrid), núm. 1, otoño de 1983.
- Véjar Lacave, Carlos y Amparo Espinosa de Serrano, *El pensamiento contemporáneo en México*, Porrúa, México 1978.
- Zermeño, Sergio *México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68*, Siglo XXI, México 1978.